

Al Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVII Legislatura

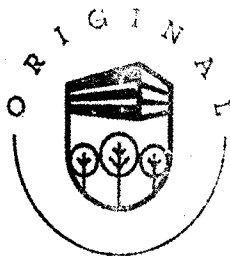
PROMOVENTE: C. MARCELO SEPÚLVEDA FERRER

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA POR ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 46 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

INICIADO EN SESIÓN: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): LEGISLACIÓN

Mtro. Joel Treviño Chavira
Oficial Mayor



**MARCELO SEPÚLVEDA FERRER y CENTRO DE
INVESTIGACIONES ZÁRATE ABOGADOS, S.C.**

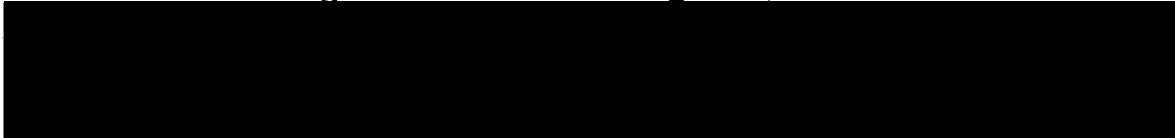
ASUNTO: Se presenta iniciativa de reforma de ley.



**H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
P R E S E N T E.-**

2 Anexa impresión de INE y 2
2 copia simple de copia 2
2 certificada de Acta 2
2 constitutiva 2

MARCELO SEPÚLVEDA FERRER, por mis propios derechos como
ciudadano y también en mi carácter de representante legal del
"Centro de Investigaciones Zárate Abogados, S.C."; señalando como



ante Usted con el debido respeto comparezco a exponer:

Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo
dispuesto por la fracción III del artículo 56 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, me permito presentar una
iniciativa de reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, a fin de adicionar
el artículo 46 Bis, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el último año, el Estado de Nuevo León se convirtió en la
entidad federativa más endeudada de México, de conformidad con los
datos de la revista Forbes México.¹ Esto debido a que al 31 de diciembre
del 2023, el Estado de Nuevo León tenía una deuda pública de 101
mmdp, superando incluso la deuda capitalina en la Ciudad de México.
Situación que se ha agravado en los últimos meses debido a los daños
causados por los recientes desastres naturales, entre otras
problemáticas cuyo conocimiento no escapa al público en general.

Con esto en perspectiva, es fácil advertir que estamos frente a un
panorama de incertidumbre financiera en la entidad, que a su vez
representa un riesgo para las empresas que prestan servicios tanto al
Gobierno estatal, como a los Municipios del Estado de Nuevo León.
Esto debido a que la evidente insolvencia del gobierno compromete su
capacidad para hacer frente a sus obligaciones monetarias en el corto,
mediano y hasta en el largo plazo.

Así pues, con este panorama es necesario cuestionar si las
condiciones que permean en el Estado de Nuevo León, hacen propicio
el cumplimiento de los fines constitucionales establecidos en el
artículo 134 de nuestra norma suprema, cuyo párrafo primero dispone
lo siguiente:

¹ <https://www.forbes.com.mx/costo-financiero-de-la-deuda-de-nl-crece-61-en-2023/>

"Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados".

Es decir, el mandato impuesto por el Constituyente fue que los recursos del Estado mexicano fueran debidamente administrados con el objetivo de asegurar su eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Lo que solamente podía ser realizado a través de procedimientos de contratación que garantizaran al Estado que los recursos serán asignados a la persona que asegure las mejores condiciones disponibles en el mercado en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.

Por ello, cobra relevancia cuestionar si la situación actual que atraviesa nuestra entidad federativa contribuye a la creación de un entorno adecuado para asegurar que las contrataciones públicas se realicen bajo las mejores condiciones de mercado. Esto debido a que en caso de no ser así, no existirán las condiciones necesarias para que los agentes económicos más adecuados participen y se involucren en los procesos de contratación pública.

En ese orden de ideas, toda vez que la insolvencia del Estado y de los Municipios es la problemática que se pretende mitigar a través de esta propuesta de reforma, la pregunta obligada que amerita esta iniciativa es la siguiente ¿qué seguridad financiera ofrece nuestro marco jurídico a los proveedores a los que no se les pagan los adeudos resultantes de un contrato público?

Si aplicáramos el marco jurídico federal, esta interrogante no tendría mayor complicación puesto que el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, establece tanto el plazo de pago a favor del proveedor, como las consecuencias que se deducen del incumplimiento de pago de la autoridad contratante:

"Artículo 51.- La fecha de pago al proveedor estipulada en los contratos quedará sujeta a las condiciones que establezcan las mismas; sin embargo, no podrá exceder de veinte días naturales contados a partir de la entrega de la factura respectiva, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los términos del contrato.

En caso de incumplimiento en los pagos a que se refiere el párrafo anterior, la dependencia o entidad, a solicitud del proveedor, deberá pagar gastos financieros conforme a la tasa

que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del proveedor”.

Es decir, que en aquellos casos en los que el contrato o pedido no establezca un plazo para el pago de los bienes o servicios, dicho plazo no podrá exceder el de veinte días naturales. Así como una vez que se vuelva exigible dicho pago, si la autoridad contratante no cumple con su obligación deberá pagar, además, al proveedor los gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, misma que para el año 2024 establece lo siguiente:

“Artículo 8o. *En los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales se causarán recargos:*

I. Al 0.98 por ciento mensual sobre los saldos insolutos...”.

Por lo que en los casos de incumplimiento de pago la autoridad contratante deberá pagar por concepto de indemnización moratoria el equivalente al 0.98% mensual sobre saldos insolutos, cifra que elevada al año arroja una tasa de 11.76% sobre saldos insolutos. Con esto, queda claro que la intención del legislador federal no fue otra que la de desincentivar el incumplimiento de los compromisos de pago de las autoridades de gobierno, mediante la imposición de una indemnización moratoria. Así, este derecho a una indemnización genera seguridad jurídica y financiera a los proveedores, pues no sólo motiva el cumplimiento de las obligaciones contractuales de las autoridades, sino que también establece claridad suficiente sobre la indemnización que podrá ser cobrada por el proveedor a causa del injusto retardo en el cumplimiento de una obligación de pago. De ahí que la normatividad federal, a nuestra consideración, se encuentre alineada a los objetivos trazados por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin embargo, esto no sucede en el caso de la legislación en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios vigente en el Estado de Nuevo León, sino todo lo contrario. Esto es así debido a que la norma en cuestión, es decir la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León:

1. No establece un plazo para el pago de los bienes o servicios que sean contratados por las autoridades.²
2. No establece sanción o consecuencia alguna derivado del incumplimiento de la obligación de pago de las autoridades contratantes.

Lo que, a nuestra consideración, constituye un incentivo para el incumplimiento de la obligación de pago, pues no existe certeza del momento en que una obligación se vuelve exigible, ni tampoco existe una sanción o consecuencia asociada a dicho incumplimiento.

Es por esto que ante un evidente vacío legal, que desde ninguna óptica es justificable, el objeto de esta reforma consiste en homologar el texto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, a aquel de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; de modo que la norma ofrezca suficiente claridad en cuanto al plazo que tienen las autoridades para pagar a los proveedores y las consecuencias derivadas del incumplimiento de dicha obligación de pago. Esto, como ya se anticipó, con el objetivo principal de propiciar condiciones de seguridad jurídica y financiera para el sector privado, para que éstas motiven una creciente participación de los agentes económicos del mercado. Ello debido a que solamente mediante una nutrida concurrencia de las personas prestadoras de servicios, el Estado podrá asegurar las mejores condiciones de contratación de conformidad con los fines establecidos por nuestra máxima norma jurídica.

Es por lo anterior que me permito proponer la siguiente propuesta de reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, a fin de adicionar el artículo 46 Bis. En consecuencia, solicito sea turnado a la Comisión competente de esta H. Soberanía el siguiente proyecto de:

DECRETO

Único: Se adiciona el artículo 46 Bis a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

"Artículo 46 Bis.- La fecha de pago al proveedor estipulada en los contratos quedará sujeta a las condiciones que establezcan las mismas; sin embargo, no podrá exceder de veinte días naturales contados a partir de la entrega de la factura respectiva, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los términos del contrato.

² Mismo que tampoco se establece en el vigente Reglamento de la Ley De Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León

En caso de incumplimiento en los pagos a que se refiere el párrafo anterior, la dependencia o entidad, a solicitud del proveedor, deberá pagar gastos financieros conforme a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del proveedor”.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al momento de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

Por todo lo antes expuesto, de esta H. Soberanía solicito lo siguiente:

PRIMERO.- Se me tenga por presentando esta iniciativa de reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

SEGUNDO.- Se me tenga por presentando la documentación correspondiente para el debido ejercicio de mis derechos ciudadanos.

TERCERO.- Se me haga saber el resultado de mis gestiones.

Justa y legal mi solicitud, espero el proveído de conformidad.

ATENTAMENTE

San Pedro Garza García, N.L., a la fecha de su presentación

LIC. MARCELO SEPULVEDA FERRER

Por mis propios derechos y en mi carácter de representante legal de “CENTRO DE INVESTIGACIONES ZÁRATE ABOGADOS, S.C.”





H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXVII LEGISLATURA

OFICIALÍA MAYOR

- Escrito signado por el C. Glen Alan Villarreal Zambrano, mediante el cual presenta iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, turnado con el número de Expediente 18722/LXXVII
- Escrito signado por los CC. José Daniel Borrego Gómez y Francisco Gerardo Martínez Malo, mediante el cual presentan iniciativa de reforma por adición de los artículos 138 Bis y 138 Bis 1 al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León y por adición de un Título Undécimo a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, al cual le fue asignado el número de Expediente 18724/LXXVII.
- Oficio signado por el C. Marcelo Sepúlveda Ferrer, mediante el cual presenta iniciativa de reforma por adición de un Artículo 46 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, al cual le fue asignado el número de Expediente 18728/LXXVII.
- Escrito signado por el C. Abraham Alexander Aguirre Larios, mediante el cual presenta iniciativa de reforma al Artículo 165 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, turnándose con el número de Expediente 18736/LXXVII.
- Oficio signado por la C. Lic. Gloria Meza Quintanilla, mediante el cual remite anexo retirando su iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, en materia del Cronista Municipal, el cual fue anexado en el número de Expediente 18029/LXXVII.

Al respecto, se informa que dicha documentación ha sido previamente digitalizada y se ofrece para su descarga a través del *Código QR* aquí proporcionado, mismo que permanecerá habilitado por los próximos 7 días naturales.

Reitero a Usted mi consideración y respeto.



ATENTAMENTE

Monterrey, N.L., a 18 de septiembre de 2024

MTRO. JOEL TREVIÑO CHAVIRA
OFICIAL MAYOR



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXVII LEGISLATURA

OFICIALÍA MAYOR

Oficio Núm. PL 006/LXXVII

C. DIP. CLAUDIA GABRIELA CABALLERO CHÁVEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN
PRESENTE. -



Por medio del presente, me permito informarle que en la Sesión celebrada el día 18 de septiembre del presente año, la C. Presidenta del H. Congreso del Estado, turnó a la Comisión que Usted preside, los siguientes asuntos:

- Escrito presentado por la C. Dip. Norma Edith Benítez Rivera, integrante de la LXXVI Legislatura, mediante el cual presenta iniciativa de reforma por adición de un Artículo 1179 Bis del Código Civil para el Estado de Nuevo León, al cual le fue asignado el número de Expediente 18700/LXXVII.
- Escrito presentado por la C. Dip. Norma Edith Benítez Rivera, integrante de la LXXVI Legislatura, mediante el cual presenta iniciativa de reforma a los artículos 117 Bis y 1213 del Código Civil para el Estado de Nuevo León y por adición de un Artículo 807 Bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, turnándose con el número de Expediente 18703/LXXVII.
- Escrito presentado por la C. Dip. Norma Edith Benítez Rivera, integrante del Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual presenta iniciativa de reforma a diversos artículos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, al cual le fue asignado el número de Expediente 18704/LXXVII.
- Escrito presentado por la C. Dip. Norma Edith Benítez Rivera, integrante del Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual presenta iniciativa de reforma al Artículo 2266 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, turnado con el número de Expediente 18705/LXXVII.
- Escrito signado por la C. Dip. Tabita Ortiz Hernández, integrante de la LXXVI Legislatura, mediante el cual presenta iniciativa de reforma por adición de un Artículo 113 Bis de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, al cual le fue asignado el número de Expediente 18718/LXXVII.